ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 18 DE FEBRERO DE 2014

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

1

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
18/2010	<p>ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de diversos preceptos de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS)</p>	3 A 20 Y 21 INCLUSIVE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

**SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL
MARTES 18 DE FEBRERO DE 2014**

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

JUAN SILVA MEZA

SEÑORES MINISTROS:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

AUSENTES: SEÑORES MINISTROS:

**MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ**

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:55 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión pública ordinaria correspondiente al día de hoy. Señor secretario, sírvase dar cuenta, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. Se someten a su consideración los proyectos de actas de las sesiones públicas número 18 solemne y 19 ordinaria, celebradas el jueves trece de febrero del año en curso, así como la sesión pública número 20 solemne, celebrada el lunes diecisiete de febrero del presente año.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Están a su consideración las actas con las que se ha dado cuenta, señora y señores Ministros. Si no hay alguna observación, les consulto si se aprueban en forma económica. **(VOTACIÓN FAVORABLE). ESTÁN APROBADAS**, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Vamos a continuar dando cuenta. Hago la observación, como todos estuvieron enterados, de que, si bien en la conclusión de la sesión pública del jueves pasado se hizo la referencia de que iba a quedar pendiente esta acción de inconstitucionalidad, en virtud de lo que se había presentado en relación con los argumentos que así fueron expresados; sin embargo, al día siguiente, el viernes, tuvimos noticia de la señora y señores Ministros respecto de que estábamos en situación de concluir precisamente este debate para efecto de no dejarlo de manera indefinida, independientemente de que la lista respetara el tema siguiente de arraigo y así procediéramos en consecuencia. De esta suerte, hago la explicación para que dé cuenta, usted, con esta acción de inconstitucionalidad, señor secretario, para continuar con el debate.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2010. PROMOVIDA POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Bajo la ponencia del señor Ministro Franco González Salas, y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor secretario. Tome nota de la ausencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y del señor Ministro Sergio Valls, previo aviso a esta Presidencia.

Vamos a continuar el debate. Estamos situados en el considerando sexto, en relación con el artículo 34. Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias, señor Ministro Presidente. Como mencioné en intervenciones anteriores, mi preocupación fundamental se centra en garantizar la protección del derecho fundamental de audiencia que debe otorgarse a todo posible afectado ante un procedimiento en el que está en juego el reconocimiento de sus derechos.

Después de analizar nuevamente, tanto las distintas opiniones que externaron las señoras y los señores Ministros como el texto de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal,

considero que la reforma al artículo 34, fracción I, de dicho ordenamiento, es -por poner algún calificativo- inocua, dado que la obligación de notificar personalmente a las partes, el inicio del procedimiento subsiste en el propio ordenamiento a que pertenece.

En efecto, el artículo 40, fracción III, dispone que el juez, en el auto que admita la acción de extinción de dominio, acordará la orden de emplazar a las partes mediante notificación personal; destaco el hecho de que este precepto emplea el vocablo “emplazar”, lo que significa, sin lugar a dudas, que para el juzgador subsiste la obligación de que el llamamiento al juicio a las partes se haga de manera personal.

Si este precepto se interpreta conjuntamente con el diverso artículo 27 de la Ley de Extinción de Dominio, como ya lo había mencionado desde su primera intervención el señor Ministro Cossío, conforme al cual son partes en el procedimiento, no únicamente el afectado, sino la víctima, el ofendido y el tercero; entonces, se puede adoptar la conclusión de que a dichas partes se les debe emplazar al juicio de manera personal.

La situación jurídica prevista en dichos preceptos de ninguna manera se ve afectada o modificada por la reforma al artículo 34, fracción I, de la Ley de Extinción de Dominio, pues aun cuando tal reforma, si bien tuvo la finalidad de suprimir la obligación de notificar personalmente el inicio del procedimiento a las víctimas, ofendidos y terceros, lo cierto es que, ante una muy deficiente técnica legislativa, esa obligación subsiste de manera clara e indubitable por disposición expresa de los artículos 27 y 40 de dicho ordenamiento legal; es por ello que, conforme a mi opinión, la reforma combatida es inocua, pues en realidad no modificó la obligación legal de emplazar personalmente a las partes.

Por las razones expuestas, considero que en el caso resulta innecesario hacer una interpretación conforme o sistemática para salvar la constitucionalidad del artículo 34, fracción I, de la Ley de Extinción de Dominio, toda vez que es innecesario salvar este precepto legal, porque la salvaguarda de los derechos que pudieran comprometerse quedan garantizados, ya que la obligación de emplazar personalmente a las partes, entre las que se encuentran las víctimas, los ofendidos y los terceros subsiste de manera clara y categórica.

En otras palabras, tal obligación quedó incólume aun con la reforma al artículo 34 del mencionado ordenamiento legal, pues el juzgador está compelido a atender el imperativo que le impone el artículo 40, fracción III, de la Ley de Extinción de Dominio, consistente en emplazar a las partes mediante notificación personal.

Es importante tener en cuenta que la reforma al artículo 34, fracción I, de la Ley de Extinción de Dominio, únicamente pretendió, sin lograrlo, desde luego, suprimir la obligación de emplazar personalmente a los ofendidos, víctimas y terceros del inicio del procedimiento; sin embargo, no tuvo como propósito, al menos textualmente, prohibir esa notificación personal. Luego, si ésta subsiste regulada de manera categórica en el artículo 40, fracción III, de la propia ley, entonces es indudable que la obligación de hacer el emplazamiento personalmente a las partes queda incólume, lo que, sin duda, permite concluir que el precepto reformado conforme a su nueva redacción no tiene como consecuencia afectar el derecho humano de audiencia, especialmente de las víctimas o de los menores de edad que constituía y constituye mi principal preocupación.

Por eso, considero que no hay ni inconstitucionalidad de la norma ni necesidad de hacer una interpretación de ninguna manera para poder mantener la oportunidad de audiencia de los afectados con ello. Muchas gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted, señor Ministro Luis María Aguilar. Señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Muchas gracias, señor Ministro Presidente. Como lo había manifestado en la última sesión, estoy a favor de la propuesta modificada del Ministro Franco, en el sentido de sostener la interpretación sistémica del artículo 34, fracción I, de la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, en los términos precisados en mi participación previa; sin embargo, estimo necesario precisar que, aunque coincida con la conclusión propuesta, no coincidiré con una premisa que sostiene el proyecto del Ministro Franco, del cual me separaría, en caso de reiterarse, sobre la que procedo a profundizar.

La primera premisa con la cual no coincido, como ya lo había adelantado en las sesiones previas, es que contiene una concepción determinada de la naturaleza procesal de la extinción de dominio, según la cual se trata de una relación procesal sólo construida constitucionalmente entre el Ministerio Público, como parte actora, y el afectado, como demandado, y el juez, la cual adquiere suficiencia regulativa en el artículo 22 constitucional, desde donde es posible construir sus exigencias normativas, así de forma completa.

De esta forma, se explica que en la página ochenta y nueve del proyecto, se afirme lo siguiente: “Sin embargo, debe indicarse, como ya quedó asentado en la evolución del artículo 22

constitucional, que la figura de extinción de dominio está regulada por la Carta Magna en dicho precepto, por lo que los parámetros que ahí se prevén son los que preponderantemente deben ser tomados en consideración para estudiar los alegatos del promovente, con la aclaración de que el legislador del Distrito Federal amplió esa regulación para incluir los derechos de audiencia y debido proceso, no sólo para el afectado, sino también para los terceros, víctimas y ofendidos, a quienes, en un momento dado, considera como partes del procedimiento de extinción de dominio, incluso, previos determinados efectos que deben considerarse en las sentencias que al respecto se emitan, como lo es la reparación del daño o que constituye una forma diferente a la del procedimiento penal o civil”.

Igualmente, esta premisa interpretativa lleva al proyecto a afirmar lo siguiente, en la página ciento tres: “de ahí que, en principio, la intervención de los terceros, víctimas u ofendidos, que incluye el legislador ordinario en el procedimiento de extinción de dominio, es una ampliación de los derechos constitucionales que estatuye a su favor, así como la previsión respecto al derecho de audiencia y debido proceso. Es por eso que dicha medida (notificación personal) no tiene el mismo significado tratándose del tercero, de la víctima o del ofendido, puesto que la materia del juicio se centra en determinar la licitud o ilicitud de la obtención o utilización de los bienes que son objeto del procedimiento, con el fin de extinguir la propiedad de un particular a favor del Estado, (en caso de que se acrediten los supuestos establecidos en la propia ley), por lo que los derechos personales de los terceros y el derecho a la reparación del daño de las víctimas y ofendidos, no son parte medular del procedimiento respectivo, sino que representan una vía más y alterna para hacerlos valer, haciendo de su conocimiento el inicio del procedimiento a través de la

publicación del auto admisorio de demanda, establecida en el numeral 35 de la propia ley”.

Desde mi perspectiva, al proceso de extinción de dominio le son aplicables, igualmente, los artículos 14, 17, 20 y 22 constitucionales, por lo que la participación del afectado, de las víctimas u ofendidos y terceros es igualmente relevante, pues como lo señalé, a mi juicio, se trata de un juicio real y universal en el que —insisto— no sólo se ventilan los derechos del afectado, sino la suerte de los derechos de propiedad de los terceros y el derecho a la reparación del daño, aunque también estos tengan otras vías para hacerlo valer.

Por lo tanto, al ser un juicio del que depende la suerte de distintos derechos constitucionales, la estructura procesal no sólo se debe ajustar al artículo 22, sino también al resto de las normas constitucionales; así, contrario a lo propuesto en el proyecto, estimo que la exigencia de protección de los derechos de las víctimas, ofendidos y terceros, es un imperativo constitucional y no constituye una mera prerrogativa del legislador, por lo cual estimo que la interpretación sistémica o conforme exigida para concluir la necesidad de la notificación personal de las partes cuando sean determinados, se sustenta en los derechos constitucionales y no exclusivamente en los preceptos legales o secundarios. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted, señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Ministro Presidente, me permitiría hacer una aclaración.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Claro, señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. Desde mi intervención anterior, cuando acepté modificar el proyecto, en la primera parte, dije que sacaría todo esto y sólo en la medida, y conforme al resultado del debate y solución del Pleno incorporaría aquello que fortaleciera eso. Es indiscutible que lo que plantea el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena está, hasta ahora, dentro de las partes que excluiría del proyecto. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro Franco González Salas. Señor Ministro Alberto Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Ministro Presidente. Señora Ministra, señores Ministros, me veo en la necesidad de hacer uso de la palabra en tanto que mi primera participación fue de adhesión al proyecto, tal cual había sido presentado por el señor Ministro Franco; sin embargo, la nutrida explicación, discusión y aportación de ideas, llevan al señor Ministro ponente a hacer ajustes importantes en su proyecto; es decir, reconociendo la eficacia y bondad de una interpretación integral o sistemática, le permite llegar a una conclusión de validez, pero bajo otra perspectiva, en tanto había expresado mi conformidad con la validez bajo los formatos e ideas del propio proyecto, hoy que reflexiono junto con él respecto de esta interpretación que llevaría a entender, tal cual fue propuesto inicialmente por el señor Ministro Pardo, que la bondad de una determinación como ésta nos llevaría a emplazar personalmente a los terceros que se encuentren identificados, entonces, convengo en sumarme en esta nueva proyección, en esta nueva interpretación; y, desde luego, hago el reconocimiento a que los

cambios que han afectado el proyecto son de verdad positivos, y es lo que me hace estar más cerca de la posición que se respalda con una interpretación sistemática, que la invalidez misma. Y sobre esa base, a pesar de que el cambio sí es fundamental, me permite también estar con la validez, en los términos que han sido aceptados por la modificación que hará el señor Ministro ponente. Es cuanto, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro Pérez Dayán. Señora Ministra Sánchez Cordero, tiene usted la palabra.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Gracias, señor Ministro Presidente. En la intervención que tuve en días pasados, tenía la duda de si deberíamos expulsar la norma jurídica, declarando la invalidez, o bien, la interpretación sistemática de la misma. Y en el caso, definitivamente me decido por la interpretación sistemática que habían propuesto algunos de los señores Ministros, y que el señor Ministro Franco González Salas ha retomado con una propuesta modificada de su proyecto; y, en este caso, realmente establecer que habrá que precisar que la regla del emplazamiento es de manera personal, pero que la excepción será por medio de edictos o publicación en el boletín oficial cuando no se encuentre la persona o no se sepa su domicilio. En esta serie de interpretación sistemática que se ha venido construyendo, a partir de las interpretaciones del Tribunal Pleno, estaría, señor Ministro Presidente, con el proyecto modificado y por esta interpretación sistemática. Esto por lo que había dicho anteriormente de inclinarme por la invalidez del precepto. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted, señora Ministra Sánchez Cordero. Continúa a discusión.

Seré muy breve también en función de las manifestaciones y la relectura de la versión taquigráfica de las discusiones anteriores.

En mi punto de vista, manifestaba que efectivamente, en principio, también había considerado el tema de la invalidez, vamos a decir pura y dura, en función de que la lectura en sí misma del precepto nos llevaba rápidamente a advertir que, tratándose del tercero, podía estar o estaría lastimado definitivamente de derechos fundamentales, garantía de audiencia, en función del debido proceso, por la falta de emplazamiento directo; sin embargo, ya en la lectura y la concatenación de los argumentos y sobre todo de la aceptación y propuesta que hizo el Ministro ponente, ahora que también se ve enriquecida, desde mi punto de vista, al aceptar el sentido del tema de afectación o el sustento, más bien, de la argumentación respecto de, no solamente las garantías procesales legales, sino los derechos fundamentales que se desprenden precisamente de esta descripción, si no se llega a hacer esta interpretación, pero a partir precisamente de esos derechos, me hace convenir con la aclaración que hace el señor Ministro Franco González Salas, respecto de que se suprimiría la primera situación y entraría ésta de refuerzo –vamos a decir– concatenando lo que se ha venido diciendo, estaría totalmente de acuerdo con el proyecto. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Gracias por todas las posiciones. Esto demuestra que el Pleno trabaja precisamente con las aportaciones de todos los Ministros. En lo personal reconsidero, con mucho gusto, mi posición, porque creo que ésta es la mejor solución al problema que enfrentamos en este punto concreto.

Y quisiera hacer un comentario, nada más, en relación al planteamiento que hacía el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, porque creo que merece también una respuesta.

Veo que su posición es muy cercana a la propuesta que se está haciendo. Él considera que no necesariamente debe acudir a una interpretación sistemática de la ley. En principio, seguiría manteniendo mi posición, con todo respeto a lo que planteó el Ministro Luis María Aguilar Morales. Pienso que es conveniente señalar que es una interpretación sistemática y que la fracción I necesariamente se tiene que interpretar a la luz de los preceptos que se han mencionado, de lo cual no queda duda que la notificación personal debe hacerse no sólo al afectado, sino también a los terceros que pueda haber, víctimas y ofendidos, y vuelvo a señalar que en el engrose estableceré precisamente la situación excepcional para que quede muy claro, que en aquellos casos en que, por cualquier razón, no estén identificados, obviamente no se les notifique, y tendrán que estarse a las reglas en donde hay supletoriedad expresamente señalada por la propia ley para estos efectos.

Éste sería el planteamiento, agradeciendo todas las participaciones de las y los señores Ministros, señor Ministro Presidente, en este punto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro Franco. Señor Ministro Luis María Aguilar, tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Nada más para decir que en esta segunda parte que dice, que ya había mencionado la señora Ministra Sánchez Cordero, en la forma en que se debe hacer la notificación, lo expuse en alguna ocasión. Creo que lo importante es que subsiste la obligación legal de hacer el

emplazamiento de manera personal, y éste es el punto fundamental.

Y luego, como lo acaba de decir el señor Ministro ponente, la forma en que se debe desarrollar eso, desde luego, si hay la imposibilidad legal y material de hacer ese emplazamiento personal, pues se acudirá a las formas que la propia ley establece o la supletoriedad autoriza para hacer la notificación que no se pueda realizar de esa manera. También, en esa parte, estoy de acuerdo, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro Luis María Aguilar. Creo que este primer tema del considerando sexto, en relación con el artículo 34, fracción I, de la ley que venimos analizando, está suficientemente discutido.

El señor Ministro ponente ha hecho modificaciones a su proyecto, entonces, vamos a someterlo a votación de esa manera. A favor o en contra del proyecto modificado, en los términos que ha aceptado y que ha expresado el señor Ministro ponente.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: A favor.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Igual.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Conforme con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Estoy con la propuesta del proyecto, pero con consideraciones en una

variante al respecto, como lo dijo el señor Ministro ponente, lo cual me motivará a hacer un voto concurrente.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Estoy con la propuesta modificada del proyecto, en sus términos.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con la propuesta modificada.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE SILVA MEZA: En el mismo sentido.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, con las precisiones del señor Ministro Aguilar Morales, en cuanto a apartarse de algunas consideraciones; esto es en cuanto a reconocer la validez del artículo 34, fracción I, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Suficiente para aprobar de manera definitiva la forma propuesta y dejar a salvo, como siempre, la libertad de cada una de las señoras y de los señores Ministros, para formular los votos concurrentes o con salvedades que estimen pertinentes.

Tomamos nota, señor secretario, de una modificación. Al abrir la sesión hice, de manera general, la justificación de las ausencias del señor Ministro Sergio Valls y la señora Ministra Luna Ramos. La señora Ministra Luna Ramos se encuentra de comisión, si puede incorporarse, así lo hará.

Vamos a continuar señor Ministro ponente. El señor Ministro Franco, recuerdo a la señora y señores Ministros, en su exposición inicial, abarcó todos los temas de este considerando sexto; sin embargo, le doy la palabra.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. En el orden en que está el proyecto, el siguiente tema es la impugnación al artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. Recuerdo que no hay, específicamente, alegaciones por inconstitucionalidad, sino que lo vinculan con el artículo 34, fracción I.

Consecuentemente, ofrezco que esta parte del proyecto, si así lo considera el Pleno, sería engrosado, obviamente, conforme a lo que acabamos de resolver sobre el artículo 34, fracción I, y lógicamente la impugnación se tendría que declarar infundada en este sentido.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a la consideración de la señora y señores Ministros. Señor Ministro Pérez Dayán, tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Ministro Presidente. Desde luego que lo que ha expresado el señor Ministro ponente es cierto. El argumento esencial, planteado por quien hizo efectiva esta acción, fue precisamente que el artículo 25 implicaba una pérdida de oportunidad para ofrecer pruebas, en tanto no podían ser emplazados o no había un emplazamiento personal; de suerte que no sé si el examen de este concepto de invalidez nos llevara a declararlo infundado, sino yo no sé si, a virtud de lo ya decidido, resulta inoperante, y eso lo someto a la consideración, en la medida en que precisamente parte de una equivocada interpretación, dependiente y condicionada a lo que se hubiere resuelto al analizar el artículo 34; de suerte que, si en el artículo 34 ya se ha declarado que participan, esto ya no tiene ninguna necesidad de ser contestado, en tanto que el sustento es que, como no son llamados, no tienen este derecho; no sé si hubiere la posibilidad de hacer la calificación de infundado, en lo particular, sugiero su inoperancia.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro Pérez Dayán. Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Señor Presidente, para abrirlo a discusión al Pleno. Me parece que, a pesar de la propuesta que hace el Ministro Pérez Dayán, podría tener un sustento si no entráramos al estudio de fondo; en el caso, hasta donde alcanzo a ver en este momento, tendríamos que hacer el estudio de la impugnación que se hace y dar la respuesta conforme a lo que acabamos de resolver, diciendo que, conforme a la interpretación integral de la ley, están en la hipótesis de ser notificados personalmente, y como consecuencia de ello, tendrán la oportunidad de defenderse en el procedimiento de extinción de dominio.

Consecuentemente, en principio, estimo que podríamos entrar en estos términos al análisis en el engrose y declarar infundada la argumentación de invalidez que se está haciendo de este precepto. Sería una consideración para que el Pleno decida cuál sería el sentido. Gracias, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted, señor Ministro Franco. Continúa a su consideración. Tenemos una propuesta de declaratoria de inoperantes, por las razones que esgrimí. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Presidente. No tengo ningún inconveniente en que se califique de infundado, generalmente cuando la respuesta a un primer concepto de violación, de invalidez o agravio, procura y da cuenta de una nueva interpretación, lo que sigue se dice, de ahí que devenga inoperante el siguiente argumento, pues parte de una interpretación ya diferente a la que se sustentó para presentar

esta defensa, pero no tengo ningún inconveniente en que se califique de infundado; lo cierto es que la única razón que le vamos a decir para no favorecer su planteamiento, es lo resuelto en el anterior; cuando lo resuelto en el concepto de invalidez anterior nos da la solución del siguiente es cuando se expresa su inoperancia; sin embargo, no tengo inconveniente en que se le llame, incluso, si quieren ineficaz, pues tan ineficaz lo es como inoperante y hasta infundado si me apuran un poco.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Podría decirse que es inconducente. Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias, señor Presidente. Estoy de acuerdo con la propuesta que nos hace el Ministro ponente. Me parece que, tal como está planteada la acción de inconstitucionalidad, donde además hemos sido muy cuidadosos para la inoperancia, en atención a la suplencia de la queja; creo que hay que establecer esta interpretación sistemática y armónica también con el artículo 25, último párrafo, a efecto de dar una respuesta coherente, lo más fundada que se pueda y razonada a la pretensión de la parte actora; de tal suerte, que me parece que hace sentido la propuesta del ponente sin negar lo interesantes que resultan los planteamientos del Ministro Pérez Dayán; y, en este sentido, me adhiero a que declaremos infundado el concepto de invalidez, atendiendo la lógica planteada en el concepto anterior. Gracias, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A usted, señor Ministro Zaldívar. Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Muy breve. Estoy de acuerdo con la propuesta, y advierto, por lo que dijo el señor

Ministro Pérez Dayán hace un momento, que tampoco estaría en desacuerdo que se manifestara el concepto como infundado, creo que no tiene mayor problema.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Vamos a tomar una votación con la propuesta del ponente de calificar de infundado, por las razones que expone o no el proyecto, ya cada uno de los señores Ministros determinará cuál es su punto de vista.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Infundado, de acuerdo con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Como dice el proyecto, infundado.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: A favor de la propuesta modificada.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Me adhiero al proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE SILVA MEZA: Igual.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos en cuanto a declarar infundado el respectivo concepto de invalidez.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Suficiente para aprobarlo en forma definitiva. Continuamos ahora con el estudio del artículo 26. Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. Recuerdo que la impugnación en una parte está vinculada precisamente con la situación de que no iban a ser emplazados; consecuentemente, podían quedar en situación de indefensión; pero hay una situación especial en el artículo 26, que es importante que el Pleno tome en cuenta, porque el artículo 26 dice: “Cuando el afectado lo solicite por cualquier medio, el juez le designará un defensor de oficio, quien realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso. Cuando comparezcan terceros y la víctima, en caso de requerirlo, tendrán derecho a que se les garantice defensa adecuada.” Esta última parte es la que, en esencia, se está impugnando, y tendría las mismas consideraciones para dar respuesta a través de la interpretación sistemática que hemos señalado. Consecuentemente, esa sería la propuesta de un engrose ya modificado, atendiendo a lo resuelto y dando contestación a esta impugnación que se realiza, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro ponente. ¿Hay alguna manifestación en contrario a lo propuesto y ahora expresado sintéticamente por el señor Ministro ponente? Señor Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias, señor Ministro Presidente. Con las reservas del contenido inicial, del parámetro inicial que se funda la razón final.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Consulto si se aprueba en forma económica. **(VOTACIÓN FAVORABLE). ESTÁ**

APROBADO, señor secretario, con la reserva expresada por el señor Ministro Luis María Aguilar. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. Se mantendrían los resolutivos como están en el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Vamos a darle lectura a los puntos que habrían de regir esta decisión, habida cuenta de las aprobaciones que de manera definitiva hemos ido haciendo en el considerando pertinente en los términos de la impugnación. Adelante, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

PRIMERO. ES PROCEDENTE, PERO INFUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

SEGUNDO. SE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 25, ÚLTIMO PÁRRAFO, 26 Y 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADOS CONFORME A LA PUBLICACIÓN DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIEZ, EN LOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO QUINTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Están a su consideración. Si no hay observación ni alguna objeción, les consulto si se aprueban en forma económica. **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

ESTÁN APROBADOS POR UNANIMIDAD, SEÑOR SECRETARIO, SUFICIENTE PARA DETERMINAR QUE HAY DECISIÓN EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2010.

Señora y señores Ministros, tenemos programada la sesión privada que correspondía al día de ayer. Voy a levantar esta

sesión pública ordinaria y convocarlos a la privada después de un receso de quince minutos.

La próxima sesión será el jueves, en este lugar, a la hora de costumbre, con el asunto programado inmediatamente después. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 12:35 HORAS)